



REVISTA POLITICA LATINOAMERICANA

REVISTA POLÍTICA LATINOAMERICANA

Publicación digital semestral

Director: Mario Toer

politicalatinoamericana.org/revista

MIOPÍA, GOLPES Y PERVERSIONES FUTBOLÍSTICAS

Un análisis de coyuntura de la crisis brasileña del 2016

SHORT-SIGHTEDNESS, COUPS AND FOOTBALL PERVERSION

Analysis of the circumstances surrounding the Brazilian crisis of 2016

Fernando Lattman-Weltman

Cientista político y sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

Contacto: Flwnyc@me.com

RESUMEN

Todavía persiste una gran perplejidad, en Brasil y en el exterior, sobre cómo entender y explicar la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, dos años antes de terminar el segundo mandato concedido por el voto popular. Para darle sentido a este acontecimiento y, a su vez, volverlo accesible para un público que no esté familiarizado con los pormenores de la vida política brasileña, este trabajo se dividirá en cinco secciones: en la primera se hará una breve recapitulación de la cronología básica del segundo mandato de Dilma, desde su elección en 2014 hasta su *impeachment* en 2016; luego, se recuperará el contexto anterior de la "Era PT" y su inserción en el marco más amplio de la democracia brasileña post-régimen militar; a continuación, se explicitará algunos de los más importantes desarrollos institucionales de la historia política reciente del país

Palabras clave: Brasil, Impeachment, Dilma Rousseff.

ABSTRACT

There is still a great perplexity in Brazil and abroad about how to understand and explain the President Dilma Rousseff's dismissal, two years before the end of the second term granted by popular vote. To make sense of this event and, in turn, make it accessible to an audience that is unfamiliar with the details of Brazilian political life, this paper will be divided into five sections: the first will be a brief recapitulation of the basic chronology of Dilma's second term, from her election in 2014 until her impeachment in 2016; Then the previous context of the "PT Era" and its insertion within the broader framework of the Brazilian post-military regime will be recovered; Then some of the most important institutional developments of the country's recent political history will be made explicit.

Key words: Brazil, Impeachment, Dilma Rosseff.

Como todo episodio novelesco, la farsa trágica del *impeachment* de Dilma Rousseff también tiene su cronología.

Desde un punto de vista narrativo más tradicional, todo comienza con las elecciones generales del 2014, con la dura disputa presidencial y la reelección de Dilma, del Partido de los Trabajadores (PT) -la cuarta victoria consecutiva del partido, después de las elecciones de Luis Inácio "Lula" da Silva (2002, 2006) y de la propia Dilma (2010)-, en un resultado ajustado contra Aécio Neves, el candidato del eterno rival: el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Pese a que, en un primer momento, Aécio reconoció públicamente la derrota, inmediatamente después tanto él como sus correligionarios y militantes "tucanos"¹ -pero también un amplio espectro de voces ubicadas mucho más a la derecha del PSDB- pasaron a cuestionar el resultado. Ya sea por la diferencia relativamente pequeña de votos -lo que levantó sospechas, improbables, de fraude-, o basados en acusaciones de utilización para la campaña presidencial de recursos provenientes de la estructura gubernamental, o incluso de la corrupción.²

Incluso antes que Dilma asumiera su nuevo mandato, en el inicio del 2015, ya se percibían en las redes sociales, y luego en las calles, los primeros movimientos de oposición intransigente contra el gobierno recién electo, bajo la consigna del *impeachment*, y hasta demandando una intervención militar, con el objetivo de revertir o invalidar el resultado de las elecciones. Mucho antes, inclusive, de escucharse la expresión "pedaladas" -que pronto se volvería célebre- o cualquier otro argumento que sirviera de fundamento supuestamente legal para alguna iniciativa de ese tipo.

Es cierto que, en este primer momento, sonaba todo muy extemporáneo y circunscripto a una minoría poco más que irrelevante. Ruidosa, pero irrelevante. Sin embargo, ya sea por los "idus de marzo", y con el debido incremento en las redes sociales -y, por supuesto, con un decisivo apoyo de la cobertura mediática tradicional- lo que parecía cosa de media docena de lunáticos tomó proporciones mucho más significativas. Además de la creciente presencia en las calles, en manifestaciones cada vez más articuladas y respaldadas -incluso por importantes entidades como la FIESP, la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo-, y ahora con el impactante refuerzo de los "cacerolazos" -especialmente en los barrios más opulentos de las ciudades importantes-, protestando ante cada comunicado oficial de la presidenta o de sus ministros en los canales de TV, el movimiento de protesta contra el resultado de las urnas ganó cuerpo y liderazgos. Tanto en una porción hasta entonces insospechada de la "sociedad civil" brasileña como en el sistema político propiamente dicho, y, por qué no, también en áreas del estado donde no se acostumbra, o no se espera ver y oír

¹ - El símbolo del PSDB es un ave típicamente brasileña: el tucán. Después de su adopción, todos los miembros, militantes y simpatizantes del partido pasaron a ser denominados así.

² - Ya era pública y notoria la famosa operación "Lava Jato" -de la cual hablaremos más adelante- que investigaba denuncias de corrupción en la empresa estatal brasileña de petróleo (Petrobras) en beneficio del PT y otros partidos.

demostraciones evidentes de parcialidad o aún de partidismo. Como es el caso de sectores del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Federal.

Sin lugar a dudas, el centro irradiador del proceso de deslegitimación sistemática del gobierno petista fue, en esta última etapa decisiva, la llamada “Operación Lava Jato” y su repercusión quirúrgica en los grandes medios brasileños. Desde el año de la elección hasta hoy, se nos brindó semanalmente (o casi) una sistemática explotación periodística de las iniciativas de la *Task Force* liderada por el juez Sergio Moro, de la ciudad de Curitiba. Que en su dicho esfuerzo de combate a la corrupción recurre a filtraciones selectivas de testimonios originados en declaraciones de “arrepentidos” - debidamente editados por los principales medios de comunicación a los que parecen tener acceso privilegiado-, a los pedidos de prisión preventiva y otros mecanismos coercitivos y jurídicamente cuestionables de investigación. Convirtiéndose en objeto, junto a la comunidad jurídica, de fuertes críticas por su comportamiento desigual cuando, de un lado, los investigados son miembros del PT -u otros personajes involucrados con las campañas y administraciones del partido-, y, por otro lado, al no reservar el mismo trato riguroso -y según los críticos, persecutorio- cuando los citados e involucrados en denuncias o acusaciones están vinculados a otras siglas rivales. Particularmente al PSDB, o al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB de el ex vice y actual presidente, Michel Temer.³

El hecho es que bajo el foco del “Lava Jato”, y en un contexto de deterioro del escenario macroeconómico nacional, ya se encontraba instalada la crisis política en el 2015 -el primero del nuevo mandato conquistado por Dilma-, cuando un nuevo elemento fue añadido al drama con un dictamen del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU)⁴ contrario a la aprobación de las cuentas del primer gobierno de Dilma. De acuerdo con este dictamen, la primera administración de Dilma Rousseff (2011-2014) habría cometido prácticas administrativas irregulares -de aquí en adelante conocidas como “pedaladas” fiscales- que constaban de retrasos de transferencias del Tesoro Nacional hacia bancos estatales para aliviar la contabilidad de los gastos de gobierno. A pesar de que tales procedimientos habrían sido usuales también en otras administraciones, sin incurrir necesariamente en una desaprobación previa por los tribunales de cuentas -ni habiendo, al parecer, una clara jurisprudencia contraria al respecto-, la publicidad en torno a este hecho fue indispensable para que se hable de la comisión de un “crimen de responsabilidad” por parte de la presidente, y, por lo tanto, de que tal desliz ya sería suficiente para respaldar un proceso constitucional de *impeachment* contra Dilma. Pese a que estas “pedaladas” estuvieron localizadas en su primer mandato, y no en el presente, como exigirían los artículos de la Constitución concernientes a la aplicación de tan grave y radical medida en el contexto de un régimen presidencialista.

³ - Digo en esta etapa porque, como veremos, este patrón de acción ya se había mostrado perniciosamente eficaz hace algunos años, con el desarrollo jurídico y mediático del caso que se denominó “mensalão”.

⁴ - El TCU es -o debería ser- un órgano técnico que auxilia al Poder Legislativo en el control de las cuentas públicas.

Encontrado finalmente el “crimen”, para caracterizar y viabilizar una condena ya decidida mucho antes, el golpe siguió su relativamente extenso recorrido, de acuerdo con el debido simulacro legal con el que se buscó revestir su precaria legitimidad.⁵

No obstante, sólo al final del 2015 se realizó el pedido de apertura del proceso de *impeachment*. Admitido por la Cámara de Diputados por iniciativa de su entonces presidente, Eduardo Cunha (del PMDB de Rio de Janeiro), a quien le tocó el papel de protagonista (o antagonista) principal de la trama burlesca. Elegido para comandar la “cámara baja” apenas iniciado el nuevo mandato de la presidenta Dilma -y contra su voluntad-, Cunha, que ya se había destacado por sus inclinaciones reaccionarias y por una trayectoria en la que no faltaban fuertes acusaciones y sospechas, se dedicó a hacer las cosas lo más difíciles posible para el Gobierno, al frente de una legislatura recién electa que presentaba nuevas señales de ampliación de la usual fragmentación del sistema pluripartidario brasileiro, pero esta vez con un tono conservador todavía más acentuado que el de costumbre. En pleno ejercicio de sus poderes, el jefe de la Cámara -y segundo nombre en la línea sucesoria, debajo del vice presidente- también fue blanco de denuncias por corrupción y por ser titular de abultadas cuentas en el exterior. Sus negativas en relación a ésto fueron convincentemente refutadas por la Procuraduría General de la República; lo que le valió la apertura de un proceso de anulación de su mandato en la Comisión de Ética de la propia casa que presidía: por mentir en el ejercicio del cargo y, por lo tanto, faltar al debido decoro parlamentario. Basado en una verdadera “tropa de choque” de diputados aliados, Cunha consiguió, sin embargo, retrasar al máximo su proceso de casación en la Cámara; permaneciendo, pese a estar bajo una sospecha cada vez mayor, al frente de la posición estratégica para la cual había sido elegido por sus pares.⁶ Conservando incluso, por su posición, el control sobre el cumplimiento y procedimiento de los pedidos presentados por sectores de la sociedad civil -aliados a los partidos de oposición a Dilma- para la apertura de un proceso de *impeachment* de la presidente. Cunha finalmente admitió uno de esos pedidos, dando inicio a su tramitación, a fines del 2015, y todo indica que lo hizo como una venganza personal contra miembros del PT que se negaron a apoyarlo en su esfuerzo por resistir la casación de su mandato.

En abril del 2016, luego de meses de idas y vueltas jurídicas y parlamentarias, y de una creciente movilización popular en las calles -pro y contra el *impeachment*-, un país polarizado y desigualmente dividido miró por TV la deprimente sesión plenaria de la Cámara donde una mayoría de más de dos tercios de diputados aceptó la denuncia de

⁵ - La fragilidad del argumento del golpe era tal -y los riesgos y plazos necesarios para su concreción según los procedimientos previstos- que a lo largo de todo ese tiempo otras alternativas (no menos problemáticas) también fueron sugeridas. Entre ellas, la anulación de la propia lista presidencial de las elecciones del 2014, basado en la sospecha de que recursos de la corrupción en Petrobras habrían financiado la victoriosa campaña. Como esa estrategia, si tenía éxito, acabaría por imposibilitar también la asunción del vice presidente electo, Michel Temer -creando gran incertidumbre y diferentes escenarios posibles, por cuenta de las reglas sucesorias vigentes-, no es difícil entender las razones de su, por decirlo de alguna manera, “encajonamiento” (hasta ahora).

⁶ - Procesos que se desarrollaban simultáneamente en su contra en la más alta Corte de Justicia del país también se tramitaban con gran lentitud. Sólo después del *impeachment* Cunha fue finalmente depuesto.

crimen de responsabilidad contra la presidente Dilma Rousseff y envió el caso para su resolución en el Senado. Poco menos de un mes después sería el turno de la “cámara alta” de aceptar el encargo de la otra Casa del Congreso, dando inicio al juicio propiamente dicho. En ambos casos no pasó desapercibido para oídos un poco más atentos las increíbles justificaciones del voto pro-impeachment de algunos diputados y senadores que, con la mayor inocencia -o desfachatez-, admitían en público que no percibían, en efecto, que la presidente hubiese incurrido en ninguna conducta que pudiera ser calificada como “crimen de responsabilidad”; pero que, aún así, votaban en contra de la continuidad de su mandato, conferido por el pueblo, porque no veían otra salida política para ella, o cualquier posibilidad de que su gobierno pudiera seguir políticamente adelante, enfrentando los problemas del país. O sea: admitían públicamente no haber encontrado alguna base jurídica para la casación de su mandato, pero para cuya anulación, no obstante, contribuyeron con sus votos.

Finalmente, a fines de agosto los senadores de la República confirmaron el veredicto esperado por todos: veinticuatro años después del primer precedente, un presidente más, electo en Brasil veía su mandato interrumpido por un proceso de destitución conducido por el Parlamento.⁷

Pero, ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Estábamos ante un procedimiento rigurosamente constitucional (que tal vez se esté volviendo más frecuente de lo esperado)? ¿O, efectivamente, la destitución de Dilma Rousseff no pasó de un nuevo tipo de golpe Estado (en un país y en un continente ya cansado de rupturas institucionales)? Si fue realmente así, ¿por qué y cómo se dio?

¡Delenda PT!

Para darle un sentido a lo que sucedió en Brasil en este fatídico año 2016, y para intentar insertar los hechos corrientes en una perspectiva histórica, política y social más amplia, será preciso retroceder un poco más en el tiempo. Las nuevas referencias cronológicas pueden ser situadas antes de la reelección de Dilma, en los años 2002, 2005, 2006, 2010, 2012 y 2013.

El año 2002, como sabemos, marcó, en primer lugar, el fin de la hegemonía *tucana* en la política nacional brasileña, después del éxito del *Plan Real* -que terminó con más de una década de crisis inflacionarias y fallidos *shocks* heterodoxos de combate a la inflación-, de las victorias electorales de Fernando Henrique Cardoso (FHC), en 1994 y 1998, de las políticas de reforma constitucional y estabilización económica de los gobiernos del PSDB,⁸ y de la introducción del instituto de la reelección para los jefes del Poder Ejecutivo (por primera vez en la historia republicana del país). En

⁷ - Como se sabe, el primer antecedente fue el de Fernando Collor de Mello, electo en 1989 y destituido en 1992.

⁸ - En verdad, el mérito inicial del combate exitoso a la inflación crónica le cabe históricamente al gobierno de Itamar Franco (1992-1995), que lanzó el *Plan Real* en el primer semestre de 1994. Fernando Henrique Cardoso, entonces ministro da Hacienda, fue quien lo coordinó y de cuyo resultado se benefició inmediatamente, como candidato a la presidencia de la República.

segundo lugar, se produjo en el 2002 la victoria electoral de Lula y del PT luego de tres infructuosas tentativas anteriores, desde el fin del régimen militar y el retorno de las elecciones directas presidenciales.

Al contrario de lo que se temía hasta entonces, y de lo que fuera históricamente anunciado por el PSDB en la campaña electoral, la llegada de Lula y del PT al Poder Central en el 2003, aunque haya representado una de las mayores alternancias de ocupación de la máquina del Estado,⁹ no constituyó ninguna amenaza de ruptura del orden político o de sacrificio de la estabilidad económica alcanzada en las administraciones *tucanas*. No sólo la nueva gestión petista mantuvo la inflación bajo control, también conseguiría rápidamente aquello que ningún gobierno nacional había logrado en muchísimo tiempo: la recuperación del crecimiento económico con una firme distribución de la renta para los sectores más necesitados de la sociedad brasileña, tristemente célebre en todo el planeta por sus índices seculares de desigualdad económica y social. Todo esto con la plena vigencia de libertades democráticas (igualmente escasas en nuestra trayectoria anterior).

Sin embargo, al éxito incuestionable de los primeros años de la primera administración petista de Lula le siguió, en el 2005, el estallido del escándalo del “mensalão”. Como se sabe, se trataba, según sus acusadores e inquisidores, de un esquema de compra de votos -con recursos secretos- de la base aliada al Gobierno en el Congreso Nacional, con el objetivo de garantizar su apoyo a la sanción de proyectos que interesaban al Ejecutivo.¹⁰ El escándalo alcanzó fuertemente al Gobierno Lula, incriminando a algunos de sus principales dirigentes, llevó a la oposición a coquetear momentáneamente con la idea de intentar el *impeachment* del entonces presidente y volvió más equilibrada la disputa electoral del año siguiente (que antes de la detonación del caso parecía ya decidida de antemano a favor de Lula). Pero aún así, para finales del 2005 el presidente ya había recuperado mucho de su popularidad, la oposición no llevó el caso hasta sus últimas consecuencias y, pese a estar recibiendo duras críticas de los grandes medios de comunicación,¹¹ Lula fue reelecto en el 2006, en el segundo turno, derrotando al candidato *tucano*: Geraldo Alckmin.

No obstante, nada sería como antes del “mensalão”.¹² De ahí en adelante, las relaciones entre el gobierno y sus adversarios, tanto en la oposición partidaria como en la sociedad -en un sentido más amplio, comenzando por los principales interlocutores de las élites y de las clases medias: los medios de comunicación- sólo fueron

⁹ - Y ese cambio ciertamente cobraría su precio. Particularmente porque se mantendría aún por mucho más tiempo de lo que los antiguos ocupantes podían imaginar.

¹⁰ - Esta versión siempre fue refutada por el PT, que admitió haber realizado sólo el llamado “caixa 2” –al igual que los otros partidos- para el financiamiento de campañas electorales del partido.

¹¹ - A diferencia de lo que había ocurrido en las elecciones del 2002.

¹² - En efecto, la asunción de Lula en el 2003, recibiendo la banda presidencial de su ex amigo y rival, FHC, en un clima de gran cordialidad, parecía indicar un nuevo momento de evolución de las instituciones en Brasil.

empeorando.¹³ El tono de las críticas iba asumiendo un acento conservador -cuando no reaccionario- y cada vez más antidemocrático. La reelección de Lula en el 2006 y el desempeño electoral del PT, a pesar del “mensalão” y de la intensa cobertura que el caso recibió, terminaron por canalizar la frustración e irritación de los opositores para un nuevo y problemático objetivo: el electorado, o la mayoría de este, que -ignorando las denuncias y los llamados a la ética- había reconducido a los petistas al poder. Y en este contingente una parte era particularmente “culpada” y responsabilizada: los pobres y los habitantes de las regiones más carenciadas de Brasil, norteros y nordestinos. Se llegó, inclusive, a atribuirle unilateralmente al programa de renta mínima del gobierno, el “Bolsa Familia”, la responsabilidad mayor por el resultado -para muchos, no deseado- de la elección.

Así, después de tantos años, resurgió en el país una concepción y un discurso político muy antiguo, cuyo rasgo característico es la total intolerancia ante las decisiones electorales populares, cuando éstas insisten en privilegiar candidaturas y plataformas que por una serie de razones desagradan a los intereses y padrones ideológicos, éticos y hasta estéticos de determinadas élites. Este fenómeno -que muchos en Brasil llaman de *udenismo*¹⁴ - parece cubrirse en el momento actual de determinaciones históricas muy particulares y específicas.

Visto desde una perspectiva histórica de más larga duración, el resurgimiento de un discurso asumidamente reaccionario y antidemocrático en Brasil nos lleva a insertar el contexto actual en una clave interpretativa más compleja y problemática.

Hasta hace muy poco tiempo, intrigaba a muchos analistas políticos el hecho de que, al contrario de lo que sucede en muchas democracias del mundo, aquí nadie se asumía públicamente como de “derecha”. Ciertamente, los politólogos siempre reconocieron sin mayor dificultad la plena vigencia de corrientes y plataformas políticas actuantes en ese lado del espectro político. De la misma manera, nunca tuvieron dificultades en identificar los principales partidos de derecha en el sistema político brasileño post-dictadura militar. Pero es sintomático el hecho de que incluso esos partidos, reconocidamente conservadores, o hasta reaccionarios, no se asumían públicamente como de derecha. En efecto, ¿Qué observador extranjero iría a suponer que partidos con nombres como Partido Democrático Social (PDS), o sus sucedáneos como el Partido del Frente Liberal (PFL), y el Partido Popular (PP), o mismo el nuevo Partido Laborista Brasileño (PTB),¹⁵ nunca podrían ser seriamente clasificados

¹³ - Y el segundo mandato sería también pródigo en denuncias y cruzadas mediáticas. Ya sea contra el gobierno o contra sus nuevos aliados en el Congreso: el PMDB y algunos de sus líderes, como José Sarney y Renan Calheiros.

¹⁴ - El *udenismo* se origina de la experiencia de la Unión Democrática Nacional (UDN), gran partido que disputó -sin logros electorales- el Poder Central durante el período democrático de 1945-1964 y que terminó adhiriendo a conspiraciones y golpes militares.

¹⁵ - El PDS era el sucesor de ARENA, partido de apoyo a los gobiernos militares post-64. EL PFL surgió de una disidencia del PDS en 1985 y aquel, luego de mudar de siglas, pasó a constituir el PP. El nuevo PTB se apropió del sello del antiguo partido de Getúlio Vargas, ligado al sindicalismo oficial, pero nunca actuó política e ideológicamente en el mismo campo de acción del original.

efectivamente como socialdemócratas, ni como liberales, o populares, o, mucho menos, como laboristas?

Lo cierto es que luego del final melancólico del Régimen Militar, en la década de 1980, con el país sumergido en crisis económicas y sociales -pero al mismo tiempo sacudido por fuertes soplos de aire fresco surgidos de la descompresión política y de la liberación de nuevas fuerzas en una Sociedad Civil simultáneamente transformada y reprimida por un largo período de dominio-, comenzó a gestarse en Brasil una verdadera hegemonía política e ideológica de centroizquierda. Ésta, a pesar de sus evidentes contradicciones, límites y posibles contramarchas, prevaleció cerca de tres décadas y demarcó el campo de identidades políticas y legitimación de las *polícies* a lo largo de todo ese período.

Los trazos de ese nuevo Orden se encontraban por todas partes. No sólo en los nombres de los partidos -inclusive los de derecha- sino también en los discursos públicos y *slogans* gubernamentales. Sobre todo, se hacía evidente en los principales documentos legales del período, en las líneas generales de las políticas públicas implementadas y en sus justificaciones. Comenzando por el mayor marco de definición del nuevo orden: la Constitución “Ciudadana”, promulgada en 1988.

Aunque se pueda argumentar que la elección de Fernando Collor de Mello, en la primera elección directa para la presidencia, en 1989, en cierta medida contradijo esta tendencia; incluso las indefiniciones del *interregno* Itamar Franco (1992-1995), o el componente neoliberal de la agenda de reformas de los gobiernos de FHC (1995-2003), no alteraron fuertemente el espíritu general predominante. Ya que en todo este período no faltaron iniciativas para combatir las desigualdades socioeconómicas, sustentadas en proyectos sociales del gobierno. Incluso las reformas que implicaban una reducción de la participación económica estatal se justificaban basándose en una supuesta readecuación de funciones, y en una retórica que aseguraba que así se podría atender mejor las responsabilidades públicas prioritarias en áreas como educación, salud y protección social.¹⁶ El propio *Plan Real*, que siempre fue la principal bandera de la era FHC, aunque en un primer momento (todavía en el Gobierno Itamar) provocó pérdidas comparativas del poder de compra de los salarios frente a los precios, inmediatamente redundó, de hecho, tanto en un control efectivo de la inflación como, consecuentemente, en un aumento real del poder adquisitivo popular.¹⁷

En cualquier caso, la llegada del PT al poder, en el 2003, le dio a este período, a sus contornos y a su identidad de centroizquierda los rasgos característicos y definitivos. De un lado, mantuvo inicialmente el control de la inflación en los límites próximos a los establecidos por la administración rival anterior. Sin embargo, a través de la recuperación del crecimiento y de políticas sociales mucho más proactivas -no sólo el

¹⁶ - Efectivamente, de las administraciones *tucanas* datan importantes iniciativas populares en áreas como las de salud. Por ejemplo, el fin de las patentes en medicamentos de uso continuo y el estímulo a la producción de remedios genéricos y más baratos.

¹⁷ - Lo que fue rápidamente difundido por el gobierno *tucano* como una señal inequívoca de su compromiso social. Sin duda, en su primer mandato, FHC se enorgullecía de haber posibilitado el consumo de pollo a las clases menos favorecidas, gracias a la eficacia del *Plan Real*.

“Bolsa Familia”, sino también una política sistemática de valorización del salario mínimo, de iniciativas en el área del microcrédito, acceso a la energía eléctrica (en áreas muy carenciadas) y a la vivienda popular, además de nuevas e importantes intervenciones para el acceso a la educación y la salud, entre otras- se colocó certeramente la maquinaria pública al servicio de una redistribución efectiva de la renta y de los recursos sociales estratégicos, como raras veces se vio en este país.¹⁸

Fue como si, por ironía del destino, algunas de las muchas expectativas de combate a la desigualdad y de promoción de la justicia social -desesperadamente postergadas en este país, por muchísimo tiempo –, que constaban, en efecto, en la agenda pública hegemónica brasilera desde la redemocratización en la década de 1980, y que por una serie de razones -inclusive fuertes limitaciones macroeconómicas y estructurales de la sociedad y del Estado brasileño- no pudieron ser debidamente implantadas en los gobiernos democráticos anteriores (no por acaso, algunos del PMDB, otros del PSDB), ahora se ofrecieran como oportunidad histórica a las administraciones petistas. Gracias a unas condiciones macroeconómicas internacionales favorables, los primeros gobiernos del PT habrían sido, por lo tanto, beneficiados no sólo por sus propios méritos e iniciativas, sino también por el esfuerzo previo y por el aprendizaje de otras administraciones en su empeño por hacer realidad -al menos en una relativamente pequeña, pero significativa parte- viejos anhelos, aunque estos anteriores gestores no quisieron, pudieron o supieron cómo realizarlos.

Independientemente de los eventuales resentimientos que tal estado de cosas pudo haber legado a los partidos que antes del PT ocuparon el proscenio de esta era democrática y democratizante que suplantó a la dictadura militar -y cuyo marco principal era la Carta de 1988 –, no creo que pueda existir alguna duda en relación al malestar todavía mayor y a la marginalidad política a la que fueron condenadas, en el mismo periodo, las fuerzas y corrientes más reaccionarias de la sociedad brasilera. Justamente aquellas que ni siquiera se aventuraban, hasta hace poco, a asumirse públicamente. E independientemente de cuáles hayan sido sus posiciones pasadas frente a las fuerzas de centro -como históricamente lo fueron el PMDB y el PSDB-, es verdad que hoy su odio preferencial está volcado casi exclusivamente hacia el partido de Lula y Dilma.

Por encima de todos sus posibles pecados, las administraciones petistas osaron intervenir directamente sobre las bases de sustentación de las viejas oligarquías -principalmente en las regiones más pobres e históricamente desfavorecidas-, promoviendo la movilidad social y el empoderamiento de las clases subalternas en una escala rigurosamente inédita. Proceso que alteró la fisonomía de muchos espacios públicos, antes exclusivos de determinados estratos de la sociedad -de universidades a aeropuertos y *shopping centers*-, y que volvió mucho más incierta y competitiva la disputa por un lugar al sol en las duras jerarquías del mercado y en los estratos

¹⁸ - También habría que mencionar otras iniciativas importantes de los gobiernos petistas. Tal vez una de las más simbólicas -y problemáticas, dada nuestra historia y pasado esclavista- sea la promoción de políticas de acción afirmativa en la enseñanza universitaria, de acuerdo al color de la piel.

socioeconómicos de la sociedad brasileña.¹⁹ Mientras la economía crecía -como en la mayor parte de la gestión de Lula y en los primeros dos años de Dilma- y la distribución del ingreso era más amplia e inclusiva, las quejas podían estar más dispersas y localizadas. Pero cuando la crisis económica llegó definitivamente, la inseguridad originada por las transformaciones resultantes del crecimiento con redistribución puso de manifiesto (como siempre) el resentimiento, el miedo y, poco después, el odio de clase.

Pero el resurgimiento, a nuevos niveles, de una derecha asumida y rabiosa -cuyo objetivo apuntó a la destrucción sistemática del PT y todo lo que representa- es sólo uno de los efectos perversos de la profunda y efectiva democratización por la que viene pasando la sociedad brasileira en las últimas décadas.²⁰ Y con certeza, no propiamente el de mayor envergadura popular.

Existen también otros procesos contradictorios en desarrollo, sin los cuales no sería fácil entender cómo fue posible producir un cambio tan relativamente rápido, radical y trágico en la experiencia democrática brasileña actual.

Control y descontrol

Uno de los aspectos más importantes del nuevo orden establecido por la Constitución de 1988 se insertó en su búsqueda por garantizar una importante *accountability* al sector público brasileño, y en los estímulos a lo que se viene llamando de creciente judicialización de la política nacional, o, al mismo tiempo, la politización (e incluso la partidización) de nuestra Justicia.

Convocada luego de la culminación del extenso Régimen Militar (1964-1985), autoritario y altamente centralizado en el Poder Ejecutivo Federal, la Asamblea Constituyente de 1987/88 se distinguió no solamente por restablecer la plena ciudadanía democrática en el país -devolviendo, inclusive, al Poder Legislativo sus prerrogativas previas-, sino también por refundar el pacto federativo, con una significativa redistribución de recursos y gastos entre los tres niveles de la administración, y, por último, pero no menos importante, por ampliar los mecanismos “horizontales” de control (en especial sobre el Poder Ejecutivo). Así, no solamente el Poder Judicial amplió el alcance de sus atribuciones políticas de control constitucional,²¹ también el Ministerio Público -responsable por la defensa de los intereses generales de la sociedad- se convirtió, junto a los tres tradicionales, prácticamente en un nuevo Poder autónomo.

Se suma a este cuadro la creciente preeminencia actual de los órganos de control vinculados a los propios Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal -respectivamente, la

¹⁹ - Se volvieron parte del folclore social desigual brasileño las variadas manifestaciones de malestar de personas económicamente privilegiadas al depararse con nuevos (y pobres) usuarios de medios de transporte de elite.

²⁰ - Y de cierto modo natural, ya que toda y cualquier democracia más longeva que la nuestra, tiene también su “derecha”; clara y públicamente asumida.

²¹ - Del mismo modo que aumentó significativamente el elenco de autores institucionales capacitados de interpelarlo para ejercer esta función.

Controladuría General de la Unión (GCU) y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU)- además, claro está, del papel estratégico ejercido por el conjunto de los principales medios de comunicación del país. Se tiene, entonces, un cuadro institucional que, en principio, debería garantizar al Estado brasileño un grado considerable de responsabilización del comportamiento público de los gobernantes y mandatarios; poderosos incentivos para el respeto a las leyes y a la rectitud en el trato con los recursos públicos y, también, para una vida pública prácticamente exenta de denuncias y escándalos de corrupción, o, inversamente, una baja tasa de impunidad relativa para corruptos y corruptores obstinados.

Ahora bien, lo que justamente aqueja hoy a Brasil es una verdadera histeria moralista y justiciera, caracterizada no sólo por la creciente desenvoltura y arbitrariedad de estos agentes controladores (y la casi total falta de control externo sobre ellos), sino también por el apoyo efectivo y resentido que se les manifiesta. Sea por los que sinceramente desean justicia, duela a quien le duela y caiga quien caiga, o por aquellos que, con un gran temor e hipocresía, también tienen que rendir cuentas; pero que se creen capaces de escapar ilesos de la saña punitiva de los primeros, a la vez que pretenden servirse del clima de caza de brujas para, selectivamente, neutralizar a sus adversarios y competidores.²² Tal apoyo a los “justicieros” viene seguramente de porciones significativas de la población, en particular de sectores de las clases medias: más “bien informadas” y celosas de su superioridad ética e intelectual ante la masa de desfavorecidos, y, no obstante, también insegura frente a las crisis económicas y grandes cambios sociales por los que pasó este país, como lo hemos explicado más arriba. Pero cuyo gran motor de indignación e intolerancia sigue siendo la recurrente sensación de que todo ese aparato institucional de control, incluso cuando es puesto en funcionamiento con un fervor casi religioso por algunos de sus agentes, no consigue disminuir la corrupción. Ya que nada, ni la más espectacular cobertura periodística de investigaciones policiales, procesos judiciales y, por fin, prisiones de otrora poderosos dirigentes políticos, parece detener el torrente de denuncias de delitos cometidos con dinero público que hace décadas impera en los noticieros brasileños.²³ Se juzga y atrapa a un acusado de corrupción, y surgen inmediatamente nuevas sospechas y acusaciones, involucrando a nuevos cuadros y siglas partidarias.

Es cierto que hoy existen novedades institucionales en marcha, que no estaban presentes, por ejemplo, hace poco más de 20 años, cuando el Presidente Collor tuvo su mandato interrumpido por denuncias de corrupción.²⁴ Aún no tenía plena vigencia la “delación premiada”, que garantiza la disminución de penas a aquellos que no solamente confiesen sus crímenes y colaboran en la recuperación de los recursos

²² - Principalmente si no se los puede vencer políticamente mediante el voto.

²³ - De tal modo que hoy no parece haber en el periodismo brasileño una cobertura política propiamente dicha. Aunque sí tenemos un abundante noticiero policial con personajes del mundo político.

²⁴ - No por casualidad el mismo presidente que había ganado la primera elección directa en el Brasil de la post-dictadura; prometiendo, justamente, acabar con la corrupción.

desviados, pero también denuncian e incriminan a los otros participantes de los esquemas ilícitos.²⁵

Está claro que se podría argumentar que esta profusión de denuncias e investigaciones sería una señal inequívoca del funcionamiento de tales órganos de control. Sin lugar a dudas.

Pero algo no parece funcionar muy bien en este sistema de *accountability*, en la medida en que tanto la denuncia como también el castigo no parecen ser capaces de alterar o inhibir el comportamiento desviante. Alguna cosa en el sistema de incentivos no parece estar conduciendo a un cambio de comportamiento, que es, o debería ser, finalmente, el objetivo de cualquier sistema legal punitivo.²⁶

De cualquier modo, otra dimensión institucional problemática de este proceso -y que, como ha sido observado, hecha raíces en el nuevo *status quo* delineado por la Constitución de 1988; pero exacerbado en los últimos años- es el de la creciente judicialización de la política en Brasil.

Hasta cierto punto, es perfectamente natural que en un régimen constitucional con una clara separación de poderes, como es la tradición del presidencialismo brasileño (inspirado en el modelo norteamericano), el Poder Judicial no se limite a cumplir su función civil más específica -es decir, proveer justicia a los ciudadanos-, sino que también ejerza determinadas funciones políticas, en especial aquellas que se refieren a la revisión y control constitucional de las leyes ordinarias y decisiones de los otros poderes. También es cierto que en el contexto atribulado, y muchas veces excepcional y autoritario, de la trayectoria republicana brasileña, los altos tribunales de Justicia no pudieron, en muchos casos, ejercer completamente sus más elevadas facultades institucionales. Sin duda, estas experiencias pasadas produjeron una fuerte influencia en la búsqueda de un mayor poder y autonomía para el Poder Judicial, tal como lo estableció la Carta de 1988.

Pero lo que vemos hoy en Brasil es, por un lado, la acción proactiva de los jueces en un afán legislador más propio de los poderes representativos -Legislativo y Ejecutivo-, ocupando con frecuencia las lagunas que deja la ley y emitiendo resoluciones normativas, con fuerza legal, sin someterse nunca a la sanción popular, que, después de todo, es el más importante y legítimo mecanismo democrático de *accountability*.²⁷ Conjuntamente con esta inestimable contribución para el desprestigio aún mayor de la clase política electa -ya que tales intromisiones son justificadas frecuentemente (y como siempre, reflejadas superficialmente por los medios) sobre la base de una supuesta inacción o negligencia por parte de los legisladores- este proceso de judicialización de la política induce a la ingenua y antidemocrática concepción de que los naturales conflictos de intereses políticos son apenas estorbos ilegítimos. Estos serían superables -o mejor: evitables- mediante la judicatura imparcial de eminencias

²⁵ - La delación premiada, que se hizo célebre con la denominada “Operación Lava Jato”, aunque ya estaba prevista hace mucho tiempo en la legislación, sólo había sido reglamentada recientemente para ser utilizada contra organizaciones criminales.

²⁶ - A no ser, claro, que el objetivo real no sea exactamente este.

²⁷ - Ya que en Brasil no se eligen jueces (ni fiscales).

jurídicas que no sólo pueden, sino que deben interpretar olímpicamente las leyes con absoluta autonomía, yendo más allá, si es necesario, de sus límites para hacer valer el verdadero interés público, cuyo diagnóstico sería privilegio de esta casta de iluminados.

Ahora bien, ¿Qué puede producir esta arrogancia, esta pretenciosa judicialización de la política -por encima de la propia y pobre política de los intereses representados en los Parlamentos y Gobiernos electos- sino justamente lo contrario? O sea: ¿La politización, e incluso la partidización del Poder Judicial? ¿Qué otro resultado podrá producir este vuelco, salvo la pérdida paulatina de legitimidad de ese Poder Judicial, esencial al régimen?

En este sentido, es imposible comprender adecuadamente todo lo que ocurrió y ocurre hoy en Brasil si no recordamos, aunque sea brevemente, el trauma nacional que provocó el juicio del “mensalão”, en los años 2011 y 2012.

Como hemos visto, el “mensalão” fue el escándalo de corrupción de la base aliada al primer Gobierno Lula (2003-2007), tal como fue investigado en las CPIs del Congreso Nacional, -e intensamente explotado por los principales medios de comunicación del país- a lo largo del año 2005 (antes de las elecciones generales del 2006).²⁸ En esta primera fase del proceso, las consecuencias inmediatas del caso, además de estremecer fuertemente la credibilidad del gobierno y manchar la reputación del PT como el “partido de la ética en la política”, se limitaron a forzar la salida del gobierno de dirigentes importantes y llevó a la Cámara de Diputados a revocar el mandato de algunos petistas -como el entonces ministro de la Casa Civil de Lula, José Dirceu- y miembros de otros partidos involucrados en las denuncias.²⁹ No obstante, el juicio a estos personajes en la Justicia -específicamente en la más alta corte del país: el Supremo Tribunal Federal (STF)- se realizó sólo al final del 2011, continuando -con la debida sobreexposición mediática- durante el año 2012.

Un juicio que se arrastró por meses, en medio de un extenso y acalorado debate en torno a la legitimidad de los procedimientos procesuales y sobre la validez de las evidencias presentadas contra los acusados. Polémica en la cual, como sugerimos anteriormente, argumentos políticos y jurídicos se entrelazaban y contraponían, fomentando controversias y elevando el tono de las posiciones: a favor o en contra de los acusados y de los propios jueces. En definitiva, las presiones para acabar con la impunidad a cualquier costo se vieron aparentemente atendidas, con castigos ejemplares a varios de los imputados -ciertamente, nunca el término “ejemplar” parece haber sido utilizado con tanta propiedad- y con parte de la “opinión pública” nacional idolatrando al nuevo héroe y eventual paladín de la Justicia: el juez Joaquim Barbosa, entonces presidente del STF, que se destacó por el riguroso tratamiento que ofreció a los imputados.

De modo que, por un lado, el juicio y su inédita espectacularización mediática - con la sistemática transmisión “en vivo” de las audiencias- dieron al caso del

²⁸ - En el caso del “mensalão” se trataba de tres CPIs (abreviatura de “Comisiones Parlamentarias de Investigación”, principal instrumento de presión del Legislativo sobre el Ejecutivo).

²⁹ - Inclusive el propio denunciante inicial del escándalo: el diputado Roberto Jefferson (del PTB de Rio de Janeiro).

“mensalão” una dimensión épica de acontecimiento histórico único y paradigmático. Cuyo significado solo se completa si se lo introduce en la trama principal de un país enfrentado a uno de sus mayores complejos de inferioridad: el de ser un pueblo incapaz de castigar a los depredadores de sus recursos públicos, y, por el contrario, recompensar las conductas éticas que deberían constituirse, por ende, en la norma de conducta vigente. Así pues, de acuerdo con la narrativa protagonizada por algunos jueces y reproducida por los cronistas mediáticos, por primera vez se podía, en efecto, creer en el fin de la impunidad y confiar que la Justicia brasileña no castigaría solamente a los pobres y carentes de los recursos políticos, sociales y económicos tan desigualmente distribuidos en este país. Aunque para eso fuese necesario recurrir a interpretaciones problemáticas de la ley y de los códigos procesales -estableciendo, de esta forma, precedentes peligrosos para el funcionamiento del Poder Judicial y para la vigencia de derechos y garantías fundamentales-, o colocar a la más alta corte de Justicia del país bajo riesgo de sospecha de partidismo y desnaturalización de su imprescindible legitimidad institucional.

De esta manera, han sido satisfechas, al menos en parte, demandas por Justicia anheladas durante mucho tiempo. Mientras tanto, se consagró una especie de maquiavelismo judicial -esto es: justificar la búsqueda de fines elevados a través de medios jurídicos discutibles- que no esperaría mucho tiempo para verse estimulado y repetido en otras instancias del aparato de control. Inferiores, inclusive. Claro está que me refiero a la “Operación Lava Jato”, iniciada en el 2014 y todavía en curso, que investiga grandes desvíos de recursos de Petrobras.

Aunque podamos localizar aquí otras innovaciones -igualmente preocupantes- en lo que se refiere a la continuidad del aludido proceso de judicialización de la política/partidización de la Justicia en Brasil, creo que ya le debe haber quedado claro al lector que precisamente esta faceta institucional de nuestra crisis política sólo puede producir sus más serios y comprometedores efectos integrada en un contexto más amplio de grandes transformaciones de la sociedad brasileña.

Y esta no parece dispuesta a dejar de manifestarse.

Ya sea por medio de “sus instituciones”, o por *motu proprio*.

El rostro irascible del “nuevo” Brasil

A pesar de la transformación del contexto económico internacional que significó la crisis del 2008, y de todos los desdoblamientos de la crisis del “mensalão”, Lula logró elegir a su sucesora en las elecciones del 2010. Dilma Rousseff se volvió conocida para los brasileños cuando ingresó en el primer gabinete de Lula en el 2003: en la cartera de Minas y Energía. Pero asumiría un nuevo status político en el 2005, cuando reemplazó al hasta entonces todo poderoso ministro jefe de la Casa Civil: José Dirceu (alcanzado por el “mensalão”). Se trataba simplemente del más importante puesto en el gabinete, debajo del propio presidente, y desde esa posición Dilma pasó a coordinar todas las principales iniciativas del gobierno. Asimismo, causó cierta sorpresa su elección para suceder al líder máximo del PT, puesto que la candidata no tenía hasta

entonces ninguna experiencia electoral. La gran apuesta de Lula con Dilma se dirigía hacia el éxito del gobierno y su líder, capaz de transferir votos para una candidata poco conocida y electoralmente inexperta -éxito que sería confirmado por las urnas en el 2010, con la victoria de Rousseff- y, simultáneamente, apuntaba contra la debacle que comenzaba a aproximarse al PT: todavía firme en el poder, pero cada vez más carente de liderazgos que pudieran, a su vez, sustituir a Lula.

En un primer momento, además del poder, Lula consiguió transferirle a la nueva presidente sus índices de aprobación. En realidad, en los años 2011 y 2012 ni la repercusión negativa del juicio del “mensalão” -con la condena de dirigentes petistas como José Dirceu, José Genoíno y João Paulo Cunha- pudo socavar la popularidad de Dilma. En especial porque nunca existió alguna mención o sospecha de alguna vinculación con los esquemas de corrupción que estaban siendo investigados y constatados.

No fue diferente durante todo el primer semestre del 2013. Precisamente, la forma clara y rápida con la que Dilma siempre lidió con cualquier auxiliar suyo acusado de prácticas sospechosas, apartándolos y preservando su gobierno, reforzó aún más la percepción general de que cualesquiera que sean los errores de comportamiento cometidos por otros miembros del PT, o por aliados, ella se mantenía intachable.

Sin embargo, de pronto todo cambió.

Sobrevinieron las protestas de Junio del 2013, y al igual que la mayoría de los observadores, Dilma parece haber tenido mucha dificultad para comprender lo que estaba aconteciendo y como su gobierno debía responder a la insatisfacción multiforme que tomaba las calles del país.

Como se sabe, las manifestaciones -que sorprendieron a todos y ocuparon las principales ciudades del país en aquel mes- comenzaron con marchas en San Pablo, en protesta contra el aumento en los pasajes de ómnibus y exigiendo la adopción de un abono gratuito en los transportes públicos.³⁰ Acto seguido, y, ciertamente, en respuesta a la estúpida represión policial a los primeros manifestantes, el movimiento tomó cuerpo y se reprodujo rápidamente en otras ciudades, agregando contingentes mucho mayores, de todos los matices e inclinaciones, e incorporando una pauta diversa -aunque caótica- de demandas y consignas. Muy pronto asumió contornos avasalladores y, ante la falta de una agenda más precisa que lo unificase, pasó a ser amplificado y, por supuesto, interpretado -más o menos desinteresadamente- como una gran ola o explosión de insatisfacción imprecisa contra “todo eso que está ahí”.³¹

La respuesta de la presidente llegó con cierto retraso y de un modo confuso. Reconoció errores y equivocaciones que tal vez no haya cometido, presentó una serie de

³⁰ - En realidad, los primeros movimientos estaban liderados por un grupo apartidario -aunque vinculado a la Sociedad Civil organizada: el Movimiento Passe Livre-, específicamente dedicado a la defensa de la causa que le dio nombre.

³¹ - Existen diversas y contradictorias teorías e interpretaciones para encontrarle un significado a este movimiento. Luego de surgir como un vendaval, conquistando corazones y mentes, fue perdiendo lentamente adhesión y sustancia, degenerando en seguida en explosiones de violencia más restringida y localizada. Finalmente, se limitó al repetido espectáculo de la acción dispersa de grupos de “Black blocks”; siendo debidamente vaciado y, por último, extinguido.

propuestas que, por cierto, podrían haber contribuido a la solución de muchos de los reclamos que se estaban oyendo; pero que, ante la cacofonía general, no podían ayudar en nada para apaciguar la ira e insatisfacción manifestada.³²

Es así que los índices de aprobación del gobierno, que venían bien desde su asunción, se desplomaron súbitamente. Con todo, lo más importante fueron las interpretaciones que reveló el fenómeno y la experiencia de una rápida movilización vía redes sociales. Aunque recurriendo a análisis apresurados y a mucho *wishful thinking*, varios sectores de oposición al gobierno -e incluso algunos de sus partidarios más descontentos-, dentro y fuera del sistema político propiamente dicho, se lanzaron a replicar el acontecimiento, reconociendo en estas jornadas una señal inequívoca de desgaste de la gestión petista, impresión reforzada por la caída efectiva de los índices de aceptación del Gobierno (y por las dificultades que éste mostró al lidiar con el fenómeno). Aunque también parecen haber aprendido las lecciones del proceso en lo referente al nuevo potencial de rápida y amplia movilización permitido por la masificación del acceso a las redes sociales, y por los efectos de las nuevas conexiones comunicacionales, en tiempo real, gracias a la globalización de la información y a la revolución tecnológica digital en curso.³³ Es decir: de la noche a la mañana tomaban conciencia que de aquí en adelante sería posible movilizar significativas multitudes para realizar manifestaciones al servicio de determinadas causas y objetivos políticos.

En su afán por desalojar, finalmente, a los petistas de la posición hegemónica que habían asumido desde el 2002, le faltaba a la estrategia opositora un elemento clave: la apuesta a la pérdida de popularidad del gobierno a causa de la agudización de la crisis económica en el país, o la exacerbación de las percepciones negativas a ese respecto (lo que, muchas veces, es lo mismo).

No parece haber un consenso entre los economistas (como es habitual) en relación no sólo al estado de la economía brasileña de entonces, un año antes de las nuevas elecciones presidenciales, sino también a cómo se debería lidiar con la misma. Es cierto que el contexto general ya no era tan auspicioso como antes; pero tampoco aparentaba ser tan grave e irremediable como se pintaba el panorama y sus expectativas futuras inmediatas.³⁴

A pesar de todas las dificultades, como hemos visto, Dilma ganaría las elecciones del 2014. Fue una intensa disputa, marcada por vuelcos en las preferencias

³² - Entre estas se destacaba -quizás por su completa inconveniencia y alienación frente a los reclamos de las calles- una desastrosa propuesta de lanzamiento del viejo tema de la reforma política. Además de, comprensiblemente, caer en los oídos sordos de la multitud, fue claramente mal recibida por la clase política. En especial por el Parlamento, que posee la prerrogativa de impulsar este proyecto y hace años que no logra sacarlo adelante (particularmente porque no hay el menor consenso al respecto, ni mucho menos el interés de hacerlo).

³³ - Precisamente, no es casualidad que las jornadas brasileiras hayan sido posteriores a movimientos internacionales -en contextos nacionales distintos; pero con prácticas y tácticas semejantes- como las protestas en Turquía, ocurridas pocas semanas antes; o, un poco más distantes en el tiempo, los “indignados”, en Europa; o el movimiento “occupy”, en Norteamérica, entre muchos otros.

³⁴ - Por cierto, mucho menos grave de lo que se mostró más adelante, después de las elecciones del 2014, cuando indudablemente los opositores apostaron directamente al “cuanto peor, mejor”.

entre los principales competidores, y hasta el último instante, tanto en la primera como en la segunda vuelta, no se podían tener muchas certezas.³⁵

Dilma resultó vencedora, es verdad. No obstante, como se dice en el argot político brasileiro: "não levaria".

Cualesquiera que sean las razones principales para eso -relativa impericia política y/o gerencial de la presidente, sistemático sabotaje de adversarios y ex-aliados, pérdida de apoyo popular- el hecho es que Dilma no lograría culminar su segundo gobierno. A esto siguió el deterioro del escenario económico, en 2015 y 2016, la consecuente pérdida de sustento en la sociedad, la erosión de la base aliada en el Congreso, la ingobernabilidad -empeorando la situación general-, y así sucesivamente, continuamos en el mismo círculo vicioso (que algunos creen que se ha interrumpido con el nuevo gobierno; pero que otros sólo ven agravarse cada día).

El “cambio de técnico” y el “descenso” inminente.

En definitiva, el *impeachment* a Dilma Rousseff ¿Fue un golpe?

Existen dos dimensiones claras, o mejor, dos requisitos previos indispensables para deponer legal y constitucionalmente a un jefe del Poder Ejecutivo en el actual régimen presidencialista brasileño. Uno de ellos es eminentemente jurídico: es preciso que el mandatario en cuestión haya tenido alguna conducta fraudulenta en el ejercicio de su mandato que pueda ser caracterizada inequívocamente como “crimen de responsabilidad”. El segundo redunda en un proceso claramente político: el juicio sobre la culpabilidad o no del presidente (eventualmente de un gobernador o intendente) le cabe al Poder Legislativo de su nivel de competencia. Por eso se dice, correctamente, que el *impeachment* es un proceso político. Sin lugar a dudas. Ahora bien, el requisito previo de orden jurídico -es decir: la clara tipificación de la comisión de un crimen- es igualmente indispensable. Por el contrario, si son atendidas solamente las exigencias políticas, la destitución del jefe del Ejecutivo se caracterizará como una usurpación del derecho fundamental de elección de los gobernantes (o negarles la (re)elección), que en un régimen republicano y presidencialista le competen única y exclusivamente al electorado. Al pueblo soberano.³⁶

³⁵ - En un primer momento la campaña estuvo polarizada, como de costumbre, entre Dilma y Aécio (PSBD). En un tercer lugar, según las encuestas, estaba Eduardo Campos, del Partido Socialista Brasileiro (PSB) y gobernador de Pernambuco, pero sin representar ninguna amenaza. En agosto del 2014, sin embargo, surgió un imponderable: Campos falleció en un accidente de avión. Su lugar fue asumido por su candidata a vice, Marina Silva, quien rápidamente se convirtió en el gran fenómeno de la campaña, superando a Aécio y acercándose a Dilma. Con todo, poco antes de la primera vuelta Marina decayó y Aécio logró garantizarse un lugar en la disputa final. Llegó a superar a Dilma en algunas encuestas, pero finalmente, en el segundo turno, el PT venció nuevamente.

³⁶ - De acuerdo con la Constitución y la tradición brasileña, a los legisladores solo le caben tales prerrogativas -de manera similar a lo que sucede en el parlamentarismo- en condiciones muy especiales. Nada que se refiera a nuestro caso en cuestión. Por otro lado, no es infrecuente que jefes del Ejecutivo seriamente sospechados de fraudes susceptibles de sanción -atendido, lógico, el requisito jurídico- no sean destituidos por sus parlamentos, ya que aún mantienen el necesario apoyo político.

Como suele suceder en la vida política, tampoco entre los juristas brasileños se manifiesta algún consenso al momento de caracterizar si las denominadas “pedaladas”, u otras prácticas cometidas por la presidenta, constituyen o no un crimen pasible de una condena tan grave, lo que por sí sólo ya indica la naturaleza problemática del atendimento al requisito jurídico en este caso. Personalmente, pese a mi clara posición actual en relación a la inconsistencia de tales alegatos, dejo de buen grado esta discusión en manos de los especialistas del derecho.

Si bien, en lo que se refiere a la dimensión política del proceso, no tengo ninguna duda en afirmar: ¡Fue golpe! Tal vez el más hábil, hipócrita y abyecto golpe de Estado ya perpetrado en un país cuya historia no está justamente carente de violencias y graves rupturas institucionales. Y lo que es todavía más insólito: independientemente de conspiraciones -que siempre las hay- todo se hizo al descubierto, a plena luz del día.

Afirmo ésto porque, como es fácilmente perceptible en la descripción que practicamos hasta aquí, la decisión de impedir el ejercicio del segundo mandato presidencial de Dilma Rousseff, sin importar como se decidió, ya había sido tomada de antemano y puesta en práctica por las fuerzas opositoras apenas terminada la elección del 2014. Como se decía en ese momento, se daba inicio a la “tercera vuelta”. Es cierto que no todos los participantes finales del proceso -entre ellos, tal vez, algunos de los más decididos- adhirieron a la aventura en los mismos momentos o con el mismo grado de responsabilidad e injerencia. Es indudable que hubo, durante todo este tiempo, una desigual y cambiante articulación de fuerzas y respaldos, hasta que en los últimos y decisivos momentos -en las votaciones finales en la Cámara y en el Senado- se dio la convergencia mayoritaria que optó por el sacrificio del mandato presidencial, y también de la legitimidad democrática y, por qué no, de la propia Constitución vigente.

Es innegable, ciertamente, que el *impeachment* fue una decisión mayoritaria de ambas Cámaras del Parlamento, que reflejó fielmente la erosión progresiva e inapelable de la sustentación del gobierno en el Congreso -con la salida, al fin, del propio PMDB, partido del vicepresidente, hasta entonces principal aliado y sostén del Ejecutivo petista- y que, por todo esto, habían desaparecido las condiciones necesarias para el funcionamiento “normal” del llamado “presidencialismo de coalición”: característico del sistema político nacional. Por consiguiente, también esta debacle refleja de algún modo una pérdida de sustentación aún más importante: la de la evaporación del apoyo mayoritario del electorado y de importantes segmentos de la Sociedad Civil al gobierno.

Pero es justamente ahí, en esta fusión de movimientos y fuerzas poderosas de la sociedad brasilera donde reside el elemento tal vez más trágico y nocivo del golpe del 2016: el esfuerzo combinado, la impresionante concentración de fuerzas forjada para derrocar a la presidenta y su partido, definitivamente, del poder. Esto implica, en primer lugar, un inmediateismo y una especie de pragmatismo ciego y peligroso. Porque no quedan dudas de que la adhesión mayoritaria de importantes sectores a la solución del *impeachment* como salida a la crisis de gobernabilidad y parálisis del Gobierno Dilma -inclusive de importantes entidades representativas del *establishment* brasileño- se debió predominantemente a las inquietudes generadas por el agravamiento de la situación económica del país. Evidentemente, el apoyo popular, más o menos entusiasta, a esta

medida radical -como fue diagnosticado por varias encuestas de opinión en ese momento- también tiene su origen en esa misma causa.

Con todo, al escoger ese camino para aliviar sus eventuales incertidumbres y preocupaciones, estas porciones importantes de la población también demostraron, en segundo lugar, un desprecio casi suicida por las más importantes reglas del juego que se venía jugando regular y democráticamente en este país. Reglas que otorgan garantías fundamentales a todos, sin distinción: a los gobiernos, a las oposiciones, a las mayorías, a las minorías, al conjunto de la sociedad y a cada individuo, sin excepción.

En pocas palabras, y valiéndome de la sugestión de un amigo -que al igual que casi todos los brasileños adoramos las metáforas futbolísticas-, diría que lo que pasó aquí en el 2016 fue, para la gran mayoría de nosotros, “sólo” un “cambio de técnicos”. En definitiva, ¿No es esta la solución mágica que suele aplicarse cuando un equipo de fútbol no gana?

Simple, ¿No? Poco costoso, absolutamente trivial y, en general, nada traumático. En el fútbol, al menos, lo peor que puede pasar con este tipo de medidas es que no se solucione nada: el equipo sigue jugando mal y perdiendo, para, al fin, terminar el campeonato descendiendo hacia una división inmediatamente inferior.

En suma, si lo que estuviera en juego fuese algo tan simple y tan poco relevante...

Al fin y al cabo, podrían decir, hace poco más de veinte años ya destituimos a un presidente electo por el pueblo, y el régimen continuó aparentemente intacto, sin grandes traumas o insatisfacciones.

Realmente.

En primer lugar, tenemos que recordar las diferencias notables entre Fernando Collor de Mello, con su Partido de la Reconstrucción Nacional (PRN), por un lado, y Dilma Rousseff y el PT, por el otro. La forma en que el primero dejó el Palacio del Planalto, en 1992, sin que casi nadie se lamenta o proteste en su nombre; muy distinto de las grandes movilizaciones que se vieron, antes, durante e inmediatamente después de la conclusión formal del proceso de anulación del mandato de Dilma. Diferencias abismales, debidas no sólo a las características personales de los dos personajes, sino relacionadas a las enormes distancias que separan al pequeño y artificial partido de Collor -con el que protagonizó su fugaz pasaje principal por la Historia política de Brasil-³⁷ con la experiencia única y ejemplar del Partido de los Trabajadores. Al contrario de tantas siglas fugaces y efímeras como el PRN -aunque distinguiéndose también de muchas otras más duraderas y relevantes-, el PT, en más de treinta años de una trayectoria marcada por vínculos estrechos con diversos movimientos sociales y amplios sectores organizados de la Sociedad Civil brasileña, creció electoralmente de modo sostenido y consistente: desde el nivel municipal al federal, escalando posiciones en el Ejecutivo y formando bancadas numerosas. Por último, pero no menos importante, agrupando a su alrededor a una militancia partidariamente identificada como ninguna otra agremiación consiguió en la historia política brasileña. No es necesario ser petista

³⁷ - Donde queda claro que tampoco sobrevivió al ocaso de su creador y líder.

para reconocer en el partido de Lula y Dilma tal vez nuestra más importante experiencia partidaria de masas, y para identificar en su colapso actual un grave perjuicio: tanto para las izquierdas como para la organización política y democrática del pueblo brasileño.

Pero tanto o más graves que las diferencias de personajes y de bases de sustento, cuando se comparan los dos procesos de *impeachment* del Brasil de la post-dictadura, son los cambios en materia de continuidad y ruptura entre los gobiernos de Collor y el de su sucesor, Itamar Franco,³⁸ y los que se están construyendo entre la plataforma de campaña del segundo Gobierno Dilma (que no llegó a acontecer) -y la de las gestiones petistas anteriores- y el giro de 180 grados promovido por Michel Temer en sus pocos meses de gestión. Mientras en el primer caso, en 1992, la principal alteración se dio, digamos, en el *modus operandi* -con Itamar recurriendo a un estilo menos arrogante que su antecesor, y más flexible o favorable a los partidos- ahora la transformación es radical. Apoyado y comprometido totalmente con los opositores al PT -el PSDB, los Demócratas y otras fuerzas reaccionarias menores- derrotados en cuatro elecciones presidenciales consecutivas. El nuevo presidente articuló su gabinete con nombres y perfiles diametralmente opuestos a los de la administración anterior, y con el cual viene defendiendo ideas rigurosamente antagónicas a los programas petistas; con los que, por otra parte, obtuvo su mandato de vice.

Es decir: no sólo el nuevo mandato de Temer es decididamente cuestionado y rechazado por una parte significativa -aunque minoritaria- del electorado brasileño. Inclusive sectores con una fuerte tradición de lucha y organización social y política -aunque descontentos o desilusionados con el PT- no parecen dispuestos a resignar las conquistas que han obtenido gracias a los gobiernos petistas.

Además, la gestión temeraria y de perfil abiertamente antipopular iniciada por el ex vice difícilmente dejará de exasperar aún más los ánimos, reduciendo su margen de maniobra frente a los graves problemas nacionales, y volviéndolo prisionero de la base reaccionaria que lo sustenta en el Congreso y en la sociedad brasileña. A menos que logre ejecutar una rápida, radical y, por tanto, sumamente improbable reversión de la crisis económica y social vigente en el país, el Gobierno Michel Temer -o cualquier otro que lo reemplace con las mismas características- parece destinado a agravar aún más nuestra situación.

Por lo cual, a aquellos que apostaron a el “cambio de técnico” como solución política miope e inmedatista para la crisis económica sólo les queda poner sus fichas a un deseo cada vez más ansioso por la vuelta a la “normalidad”, sea lo que esto signifique de aquí en más para Brasil.

Por cierto, para conseguir ésto podrán contar con el generoso apoyo de los grandes medios de comunicación brasileños. Tal como sucedió con el proceso sistemático de desconstrucción de los gobiernos petistas, ellos no les fallarán en esas horas probablemente difíciles que nos aguardan. Es lo que se puede verificar ya mismo en el noticiero económico (cuyo optimismo es “contagioso”).

³⁸ - Podríamos ir más lejos, comparando la gestión del primer Fernando, Collor, con el segundo, Henrique Cardoso (luego del *interregno* de Itamar).

Y tal como se dio en la cobertura de las últimas elecciones municipales. Todo en el más perfecto orden y normalidad. Principalmente cuando se trata de exhibir ostensiblemente las derrotas del PT, las victorias del PSDB o de otros partidos de la nueva base aliada, o incluso al analizar un tanto precipitadamente los posibles significados supuestamente unívocos de los índices de abstención, de votos nulos y blancos en determinados colegios electorales. Nada, en conclusión, muy distinto de lo previsible y ansiado.³⁹

Sólo resta saber cuánto el Brasil del 2016 se parece con el de otras rupturas pasadas y recaídas en la “normalidad”. Y si el cambio de técnico nos salvará del descenso.

Por el contrario, algo me dice que el nuevo “campeonato” no será como los anteriores.

Ni que los mismos vencedores de siempre vayan a festejar al final.

Traducción: Pedro Costa

³⁹ - Con excepción, tal vez, de la victoria por aquí y por allá de algún que otro candidato, partido o representante de sectores de nuestra sociedad considerados un tanto problemáticos. O a lo máximo alguna disconformidad discreta con las señales evidentes de violencia política visiblemente relacionadas con la persistente criminalidad urbana que crece y se propaga por el país (como, por ejemplo, los varios casos de asesinatos de candidatos, en la periferia de ciudades como Rio de Janeiro, por vínculos o disputas territoriales con traficantes y milicianos)